



## RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 315 -2015-GRJ/GR

Huancayo, 12 5 JUN 2015

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

### VISTO:

Informe Legal N° 033-2015-GRJ-CEPAD/ORAJ de fecha 20 de enero de 2015; Reporte N° 005-2015-GRJ/CEPAD de fecha 14 de Enero de 2015; Memorando N°10-2015-GRJ/ORAJ de fecha 12 de enero de 2015; Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Alejandro Augusto Cedeño Monroy contra la Resolución Ejecutiva Regional N° 636-2014-GR-JUNIN/PR de fecha 02 de diciembre de 2014, Informe Técnico N° 072-2014-GRJ-CEPAD de fecha de 03 de noviembre de 2014; y;

### CONSIDERANDO:

Que, conforme fluye de los actuados mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 636-2014-GR-JUNIN/PR de fecha 02 de diciembre de 2014, previo procedimiento administrativo disciplinario se ha impuesto sanción disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones por 30 días al señor Alejandro Augusto Cedeño Monroy en su condición de ex Director Regional de Administración y Finanzas Junín, por que incurrió en faltas de carácter administrativo disciplinarios denominadas como incumplimiento de normas establecidas y negligencia en el desempeño de sus funciones, las mismas que se detallan en el Informe N° 002-2013-2-5341, "Examen Especial a los Proyectos de Inversión por Administración Directa del Gobierno Regional Junín, periodo del 01 de enero del 2009 al 31 de diciembre de 2010", específicamente en las observaciones 01 y 02, cuyo sustento legal está tipificado en los incisos a) y d) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276 que aprueba la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones de Sector Público;

Que, el señor Alejandro Augusto Cedeño Monroy interpone su Recurso de Reconsideración contra la Resolución Ejecutiva Regional N° 636-2014-GR-JUNIN/PR, porque a su criterio los miembros de la CEPAD no ha sustentado la tipicidad de la falta cometida por el cual se le sanciona y tampoco han realizado un análisis real y objetivo, con respecto a la observación 01 del Informe N° 002-2013-2-5341, asimismo señala que existió vulneración al principio de debido proceso por un efecto de notificación ya que realizo de manera personal, sino a través de su hermana. Además establece que la ex Directora Regional de Comunicaciones fue la que suscribió la conformidad del servicio, la que lleva al procedimiento de pagos a los prestadores de servicios con el requerimiento del usuario, es por eso que la dirección de comunicación es quien requirió el pago, al realizar el requerimiento, asimismo señala que no ha se realizado una debida motivación de la tipicidad amparándose en el artículo 230°, inciso 4 de la Ley N° 274 "Tipicidad" - solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de la Ley mediante su



1099012  
2015-06-12



tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o análogo", ya que no se detalla ni específica que incumplimiento hacen referencia;

Que, con respecto a la observación 02 del Informe N° 002-2013-2-5341, señala que nuevamente se vulnera el Principio de Tipicidad y el de Legalidad al no sustentar, motivar y menos señalar expresamente los hechos que han ameritado la apertura de proceso administrativo disciplinario, ya que como es de verse el informe antes mencionado solo da recomendaciones genéricas. De igual manera señala que no se ha cumplido con el Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, referido al procedimiento que corresponde instaurar para las sanciones de funcionarios provenientes de Informes de Control de los Órganos del Sistema Nacional de Control como el caso presente recaído en el informe antes señalado, también refiere el impugnante no actuó de manera negligente al haber permitido los pagos por conceptos de remuneraciones diversas y dietas de los Consejeros Regionales, gastos de publicidad y viáticos, del contenido de dichas imputaciones se evidencia que no existe motivación de las infracciones y que tampoco incumplió sus deberes por haber ejecutado gastos que no se hallaban dentro del Plan de Trabajo la Liquidación de Obras y Proyectos, puesto que la Resolución de Gerencia General es de fecha 25 de marzo del 2009 y el este empieza a laborar el 17 de enero de 2011;

Que, como se sabe en un Estado Democrático de Derecho la sujeción del ordenamiento y la sociedad es su totalidad los principios y los mandatos que la Constitución Política despliega son el fundamento mismo del sistema, en nuestro contexto, la Constitución Política contempla los derechos fundamentales y configura los poderes e instituciones que rigen el Estado junto a sus competencias. Por ellos su cumplimiento es de vital importancia, no solo por la trascendencia de su contenido, sino porque este genera un primer mandato sobre autoridades y ciudadanos de respecto a los derechos de personas;

Que, el pliego del Gobierno Regional Junín, constituye única instancia y ante el recurso de reconsideración señalado en el artículo 208° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, establece que se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer Acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de los actos administrativos emitidos por los órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Así tenemos que la Ley incluye un situación excepcional para el ejercicio del recurso; esto es su procedencia extraordinaria cuando se trata de cuestionar actos emitidos en única instancia como la ocurrida en el presente caso, por lo tanto el impugnante tendría agotada la vía administrativa, por no existir instancia superior ante la cual plantear alguna apelación, asimismo el artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Junín establece que la Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Junín; recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del pliego presupuestal del Gobierno Regional Junín;

Que, la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando estos lesionan determinados bienes



jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar la relación de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejercen de manera previsible y no arbitraria conforme se encuentra establecida en el artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 al establecer los principios de la potestad sancionadora administrativa. Así por el principio de tipicidad se establece que solo constituye conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de la Ley y no está permitida interpretación extensiva o analogía, salvo el caso que la Ley lo permita tipificar por vía reglamentaria conforme se encuentra establecido en el numeral 4) del artículo 230° de la Ley 27444; al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia recaída en el Exp. N° 01514-2010-PA/TC. La potestad sancionadora del Estado-Principio de Legalidad en materia sancionadora: "La aplicación de una sanción administrativa constituye una manifestación de la potestad sancionadora del Estado, por lo que su validez, en el contexto de un Estado de derecho respetuoso de los derechos fundamentales, está condicionada al respeto de la Constitución y de los principios en ella consagrados. Por ello la administración, en el desarrollo de procedimientos administrativos disciplinarios, está vinculada al irrestricto respecto de los derechos constitucionales procesales y a los principios constitucionales que la informan";

Que, el fundamento del recurso de Reconsideración en palabras de Morón Urbina "Radica en permitir que la misma autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones de criterio o análisis. Como se trata de la autoridad que ya conoció el caso, antecedentes y evidencia, presume que podría dictar resolución con mayor celeridad que otra autoridad que recién conozca los hechos. Presume que la autoridad toma conciencia de su equivocación a partir del recurso del administrado, procederá a modificar el sentido de su decisión para evitar el control posterior al superior". En este mismo orden de ideas debemos tener en cuenta que para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la Ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración, lo que no sucede con el recurso interpuesto por el recurrente que es una copia parcial de los argumentos presentados en su descargo, ya que se percibe los mismos fundamentos, por lo tanto no genera una reforma en nuestra apreciación a la sanción interpuesta;

Que, por lo precedentemente anotado, debe declararse infundado el Recurso planteado, por cuanto, aplicarse la sanción administrativa de suspensión sin goce de remuneraciones por 30 días al impugnante, la administración ha respetado los derechos de este dentro del marco constitucional y legal y de acuerdo al debido procedimiento, también al artículo 230° de la Ley 27444, por cuanto se instaura proceso administrativo disciplinario al impugnante mediante Resolución Directoral Administrativa N° 716-2014-GRJ/ORAF de fecha 10 de setiembre de 2014, porque habría incurrido en presuntas faltas de carácter administrativo disciplinario por reiterada resistencia al cumplimiento de las ordenes de sus superiores relacionadas con sus labores la misma que se encuentra tipificado en el inciso b) del artículo 28° de la Ley de Bases de la Carrera





Administrativa y Remuneraciones del Sector Público aprobado por el Decreto Legislativo N° 276, por ello, el impugnante con fecha 27 de octubre de 2014, presenta su descargo, posteriormente, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 636-2014-GR-JUNIN/PR de fecha 02 de diciembre de 2014, se le sanciona al recurrente por la misma falta ya señalada en la Resolución Directoral Administrativa N° 716-2014-GRJ/ORAF;



Que, la conducta del impugnante a todas luces es sancionable, por lo tanto, se cumple con el supuesto de hecho establecido en el inciso b) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276 que establece: Son faltas de carácter disciplinario: " la reiterada resistencia al cumplimiento de las ordenes de sus superiores relacionada con sus labores" no habiéndose realizado interpretación extensiva o analogía, cumpliéndose de esta manera con el principio de tipicidad; además que haber vulnerado lo contemplado por el MOF, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 645-2003-GRJUNIN/PR de fecha 11 de setiembre de 2003, que establece: "Dirigir y supervisar la administración, de los recursos humanos económicos financieros y materiales del Gobierno Regional Junín y de sus Órganos desconcentrados" de igual manera, incumplió lo señalado en el artículo 57° del ROF aprobado mediante Ordenanza Regional N° 099-201-GRJ/CR de fecha 11 de febrero de 2010 que dispone " programar, dirigir y controlar los proceso técnicos de personal, contabilidad, tesorería, ejecución presupuestal abastecimientos, de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes;



De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27444 y demás normas conexas;

### SE RESUELVE:



**ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO** Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor ALEJANDRO AUGUSTO CEDEÑO MONROY contra la Resolución Ejecutiva Regional N° 636-2014-GR-JUNIN/PR de fecha 02 de diciembre de 2014, dándose por agotado la vía administrativa.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución a los órganos internos del Gobierno Regional de Junín, Oficina de Recursos Humanos, y al interesado conforme a Ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

ADUC/GRJ  
ORH/FFH



Angel D. Unchupico Canchumani  
GOBERNADOR REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYA

25 JUN 2015

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL